Sustituyendo artículos del decreto ley 6.769/958 y ley 8.613

La Plata, 28 de marzo de 1979.

Visto lo actuado en el expediente número 2.125-4.797/78 y la autorización otorgada mediante la Instrucción número 1/77, artículo 1º, apartado 3.1. de la Junta Militar; en ejercicio de las facultades legislativas por ella conferidas, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, sanciona y promulga con fuerza de —

LEY:

Art. 1º Sustitúyense los artículos 143 y 225 del decreto ley 6.769/58 —Orgánica de las Municipalidades— texto según ley 9.117, por los siguientes:

“Art. 143. Los oferentes en las licitaciones de obras públicas municipales deberán estar inscriptos en el Registro a que se refiere el artículo 140. Se admitirán también en las licitaciones a quienes estuvieren gestionando su inscripción en dicho registro, quedando las propuestas que presentaren condicionadas al resultado del trámite de inscripción. Será facultativo para el Departamento Ejecutivo disponer que los Pliegos de Bases y Condiciones exijan la inscripción de los oferentes en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, cuando la envergadura de la obra o cualquier otro motivo lo justifiquen suficientemente”.

“Art. 225. El patrimonio municipal está constituido por los bienes inmuebles, muebles, semovientes, créditos, títulos y acciones, adquiridos o financiados con fondos municipales, las donaciones y legados aceptados y todas las parcelas comprendidas en el área urbana que pertenezcan al Estado por dominio eminente o cuyo propietario se ignora.

El dominio de los sobrantes declarados fiscales se regirá por lo dispuesto en la ley de la materia”.

Art. 2º Sustitúyese el artículo 12 de la ley 8.613 —texto según ley 9.117— por el siguiente

“Art. 12. Las obras públicas que se realicen por contrato con terceros, aun aquéllas respecto de las cuales se impone la percepción de su costo a los beneficiarios, sólo podrán ser adjudicadas cumplido el requisito previo de la licitación. Sin embargo, podrán contratarse directamente, sin tal requisito cuando:

- a) Se contrate con reparticiones oficiales y entidades en las que el Estado tenga participación mayoritaria.

- b) Se trate de obras de costo cubierto contratadas por beneficiarios y empresas constructoras, por las que no se imponga contribución a los vecinos no adherentes.
- c) Se trate de obras de infraestructura realizadas por cooperativas o asociaciones de vecinos con percepción del costo directamente de los beneficiarios.
- d) Su justiprecio no exceda el monto establecido en el artículo 133, primer párrafo, del decreto ley 6769/58.
- e) Se trate de trabajos de urgencia reconocida u obedezca a circunstancias imprevistas que demandaren una inmediata ejecución.
- f) Se haya realizado una licitación y no haya habido proponentes o no se hubieren hecho ofertas convenientes.
- g) Se contrate entre vecinos y empresas constructoras la ejecución de las obras referidas en el último párrafo del artículo 60 del decreto ley 6.769/58, siempre que no excedan el volumen ni el plazo de ejecución que se establecen a continuación y se satisfagan los recaudos que seguidamente se indican.

Las excepciones que determinan los incisos c) y g) precedentes sólo podrán ser autorizadas siempre que los vecinos lo petitionen en forma expresa y se cuente con la adhesión del setenta (70) por ciento, como mínimo, de los beneficiarios de la obra. Además, será menester que las obras que se contraten no excedan de cinco (5) cuadras cuando se trate de ejecutar pavimentos y de diez (10) cuadras para obras de iluminación,

redes de electricidad, gas, cloacas y aguas corrientes. En ningún caso, las obras que se autoricen podrán tener un plazo de ejecución superior a los sesenta (60) días corridos”.

Art. 3º Derógase el artículo 299 del decreto-ley 6.769/58. —Orgánica de las Municipalidades— texto según ley 8.851.

Art. 4º Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro y “Boletín Oficial” y archívese.

SAINT JEAN.

J. L. SMART.

Registrada bajo el número nueve mil doscientos ochenta y nueve (9.289).

E. A. Molina.

FUNDAMENTOS

La evolución del sector municipal y las modificaciones que se han ido produciendo en la legislación general, con incidencia sobre materias propias del desenvolvimiento comunal, determinan la necesidad de proveer algunos ajustes en las normas legales que integran el régimen orgánico de las municipalidades.

En tal virtud, se han debido abordar temas de indudable interés, vinculados a las obras públicas municipales, como lo son los relativos a la registración de contratistas y al sistema de contratación directa para trabajos de infraestructura de volumen limitado.

En cuanto al primer aspecto se debe señalar que en oportunidad de la sanción del actual texto de los artículos 140, 141 y 143 de la Ley Orgánica Municipal la finalidad perseguida fue la de evitar complicaciones burocráticas y facilitar las contrataciones de obras. En virtud de que, a la fecha, se ha dado al Registro de Licitadores de la Provincia una estructura descentralizada, mediante la creación de subdelegaciones (Resolución 1.221 del 10 de octubre de 1978 del Ministerio de Obras Públicas), se considera que puede avanzarse en el propósito inicial de simplificación administrativa en el rubro. El señalado organismo puede coadyuvar eficazmente, ahora con inmediatez en todo el territorio bonaerense, con los servicios que están a cargo de los registros similares de las Municipalidades, tanto por la especificidad y nivel técnico de su cometido, como por la experiencia aquilatada a través de la gestión desarrollada, cuando la envergadura de la obra o cualquier otro motivo lo justifique, mediante el ejercicio de la potestad que se asigna en la ley adjunta al Departamento Ejecutivo Municipal de exigir la inscripción de los oferentes en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones.

Además, se dispone asignar continuidad a la modalidad de contratación directa de obras de infraestructura municipal entre vecinos y empresas, actualmente autorizada hasta el 31 de diciembre de 1978, por el artículo 299 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (según ley 8.851).

Avala tal criterio la circunstancia de que este régimen transitorio de contratación, establecido para obras de volumen limitado (hasta cinco cuadras de pavimento y diez cuadras para obras de iluminación, redes de electricidad, gas, cloacas y aguas corrientes) puede constituir un paliativo para las restricciones que eventualmente se han de producir en cuanto a nuevas contrataciones durante el año 1979, como consecuencia de no poderse contar con nuevos cupos de créditos, similares a los hasta ahora asignados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Será de interés dar lugar a que los vecinos tengan la posibilidad de encauzar su demanda de obras de infraestructura, junto con otras opciones, por esta modalidad que, aunque reducida a una escala no ambiciosa, ha servido a través del tiempo para emprender numerosos trabajos.

La ley que se acompaña, asimila la modalidad de ejecución de obras municipales por cooperativas y asociaciones de vecinos al mismo régimen a que se ha hecho referencia precedentemente, a fin de encuadrarlo en un marco que se lo estima prudente y adecuado a las posibilidades de dichas entidades.

También surge como conveniente la reforma del artículo 225 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, con el objeto de adecuarlo a la ley 8.912. Dicho artículo, al legislar sobre la formación del patrimonio municipal, se refiere a "...los solares, quintas y chacras comprendidos dentro del ejido de las ciudades y pueblos, que no fueran de propiedad particular". Pero cabe tener presente que la mencionada ley 8.912 derogó otras leyes que versaba sobre ejidos urbanos y sus ampliaciones, motivo por el cual en la legislación provincial vigente, no se encuentra definido el concepto de ejido consignando solamente la citada ley 8.912 la mención de "área urbana" concepto que por su similitud con el anterior debe ser incorporado a la norma en análisis. Con motivo de la consideración de este tema, los organismos asesores han concluido también que sería oportuno ajustar el enunciado de la última parte del artículo para concordarla con disposiciones de la legislación de fondo.